	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

No. Acta: 03	Dependencia: Comité de Conciliación y Repetición	Fecha 06 de marzo 2023
--------------	--------------------------------------------------	---------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:

Partición de integrantes del Comité de Conciliación y Repetición:

ANGELO QUINTERO PALACIOS – Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales

MANUEL AVILA OLARTE – Jefe Oficina Asesora Jurídica

ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL – Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaria del Comité:

ANDREA PINZÓN TORRES

Invitados:

GLADYS ESPITIA PEÑA – Coordinadora Grupo Control Interno


NEIL LOZANO – Apoderado de la Entidad

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Sesión ordinaria del mes de marzo del año 2023 del Comité de Conciliación convocada el en los términos de la Resolución 432 del 14 de diciembre de 2021, para la evaluación y análisis de: 1. Solicitud de conciliación prejudicial convocante Owen Santiago Ivor Jones Hugues convocado Parques Nacionales Naturales de Colombia, Procuraduría 155 Judicial II para asuntos Administrativos de Santa Marta, radicado E-2022-735815 2. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Rocío Gómez Mármol contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Otro, Tribunal Administrativo del Magdalena, radicado 2022-00024-00. 3. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Saida Milena García Manjarrez y Otros contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Otros, Juzgado Noveno Administrativo Del Circuito Judicial de Santa Marta, radicado 2022-00024-00.

TEMAS A TRATAR:

1. Verificación del quorum: Considerando la sesión de manera presencial y virtual, el quórum se verifica con llamado a lista, comprobando de esta manera que exista quórum en los términos previstos Resolución 432 del 14 de diciembre de 2021.
2. Informar inasistencia, impedimento o recusación.
3. Evaluación y análisis de la procedencia o improcedencia de los siguientes asuntos:
1. Solicitud de conciliación prejudicial convocante Owen Santiago Ivor Jones Hugues convocado Parques Nacionales Naturales de Colombia, Procuraduría 155 Judicial II para asuntos Administrativos de Santa Marta, radicado E-2022-735815
2. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Rocío Gómez Mármol contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Otro, Tribunal Administrativo del Magdalena, radicado 2022-00024-00.
3. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Saida Milena García Manjarrez y Otros contra Ministerio de Ambiente y


	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

Desarrollo Sostenible, y Otros, Juzgado Noveno Administrativo Del Circuito Judicial de Santa Marta, radicado 2022-00024-00.


4. Propositiones y Varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	<p>Siendo las 8:30 a.m. se procede a instalar presencial y por medios virtuales la sesión del comité, previamente convocada mediante correo electrónico, en el que se expone el orden del día, se remiten en archivo adjunto los asuntos a someter y se indica que la participación se realizara por medios presenciales y electrónicos.</p> <p>Se indica por Secretaría Técnica, que ninguno de los miembros manifestó inhabilidad o algún impedimento para conocer sobre los asuntos que se someterán a consideración.</p> <p>Verificación del Quorum: Con la participación de los miembros Manuel Ávila, Astrid del Castillo quienes participan de forma presencial, Ángelo Quintero y Diana Oviedo se conectan vía electrónica, se comprueba que existe quorum de liberatorio y decisorio, en los términos previstos en la Resolución 432 del 14 de diciembre de 2021. Así mismo se cuenta con la participación presencial de la jefe del Grupo de Control Interno de la Entidad.</p>
2.	<p>Aprobación del Orden del Día.</p> <p>Por secretaria expone el orden del día propuesto en la convocatoria a la sesión, para consideración y aprobación de los miembros del Comité. Y aprueban el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. Se hace llamado a lista y se verifica el quorum con la participación miembros Ángelo Quintero, Manuel Ávila, Astrid del Castillo quienes participan de forma presencial y Diana Oviedo r de forma virtual. 2. Informar inasistencia, impedimento o recusación. Previamente a la sesión se informó a esta Secretaría la imposibilidad de asistir por el Dr., Gustavo Sánchez. 3. Asuntos a conocer. <ol style="list-style-type: none"> 1. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Rocío Gómez Mármol contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Otro, Tribunal Administrativo del Magdalena, radicado 2022-00024-00. 2. Solicitud de conciliación prejudicial convocante Owen Santiago Ivor Jones Hugues convocado Parques Nacionales Naturales de Colombia, Procuraduría 155 Judicial II para asuntos Administrativos de Santa Marta, radicado E-2022-

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

	<p>735815</p> <p>3. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Saida Milena García Manjarrez y Otros contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Otros, Juzgado Noveno Administrativo Del Circuito Judicial de Santa Marta, radicado 2022-00024-00.</p> <p>4. Varios. La Dra. Gladys Espitia solicita que se incluya en este punto el tema del Informe de Ekogui.</p>
3.	<p>Presentación de los temas:</p> <p>Se presenta por el apoderado Neil</p> <p>1. Partes del proceso o caso. Demandante: Rocío del Carmen Gómez Mármol; Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia</p> <p>Hechos. De la lectura integral del acápite de la demanda, no se logra establecer con precisión los hechos y la fecha de su materialización, que comportan presuntamente la generación de un daño susceptible de reparación a cargo de las entidades demandadas. La parte accionante, hace la salvedad que el presente proceso no pretende demandar una operación administrativa, infiriéndose entonces, que la parte demandante perdió la posesión de una franja de terreno baldía a consecuencia de una operación administrativa, valga la redundancia.</p> <p>Hechos - Complemento a los descritos en el registro relacionado. Cabe resalta, que la parte accionante argumenta como hecho relevante, que previo a expedirse la Ley 2 de 1959 (Mediante la cual se declara entre otras cosas, son Parques Nacionales Naturales aquellas zonas que el gobierno nacional delimite y reserve de manera especial, por medio de decretos en las distintas zonas del país), ya ostentaba la aprehensión material del bien inmueble.</p> <p>Inmueble que según la parte actora se encuentra ubicado en sector denominado Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta con una extensión aproximada de 14 hectáreas.</p> <p>Pruebas allegadas al caso por las partes</p> <p>Demandante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se considera como hecho notorio la demolición de los inmuebles ubicados en el sector denominado Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta. - Informe de perito evaluador. - Solicitud de pruebas testimoniales. <p>Demandado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicita interrogatorio de parte - Documentales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Resolución 21 de 1975 del INCORA. 2. Memorando PNNC respuesta permisos GTEA 3. Memorando PNNC información construcciones ilegales PNN Tayrona Sector Granate

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

4. Folio Matrícula Inmobiliaria No. 080-4164

5. Acuerdo 4 de 1969 delINDERENA

6. Acuerdo 292 DE 1969 del Ministerio de Agricultura

7. Informe sobrevuelo de reconocimiento infraestructuras ubicadas en el sector Bonito Gordo al interior del Parque Nacional Natural Tayrona.

- Se solicita que se oficie a la Inspección de Policía (Alcaldía de Santa Marta), con el propósito de que se allegue copia del expediente policivo en relación con las ocupaciones ilegales y las diligencias de desalojo y desmonte de los predios que ocupaban el PNN TAYRONA

Principal problema jurídico

Se requiere de terminar, si a consecuencia del proceso policivo de desalojo y desmonte de la construcción realizada por el accionante (Operación administrativa), generó un daño que comporte el reconocimiento de una indemnización a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Análisis de la caducidad de la acción y/o la prescripción de los derechos. De acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de la jurisdicción de contencioso administrativo, es viable considerar que todas aquellas pretensiones en relacionadas con predios baldíos que se quieran hacer efectivas por la cuerda procesal de la acción de reparación directa, la caducidad se contabiliza a partir de los dos años siguientes a la ocurrencia y/o conocimiento de los hechos.

Para el caso que nos ocupa, es de señalar que mediante resolución 191 del 31 de agosto de 1964 expedida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, se alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos. De igual manera, se cuenta con la resolución 21 del 23 de abril de 1975 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución ejecutiva 177 del 16 de junio de 1975, publicada en el diario oficial 34361 del 21 de julio de 1975, resoluciones que incorporan unos predios al área y el régimen legal Parque Nacional Natural Tairona.


En ese orden de ideas, obsérvese que la demanda se fundamenta en que el accionante ostentaba la posesión del predio antes del año 1959, de tal manera, que el término de caducidad de dos años debe contarse a partir del 22 de julio de 1975.

Es decir, que el globo de terreno donde hace parte el predio objeto de reclamación, se graba como reserva forestal a partir del 21 de julio de 1975, fecha de publicación del acto administrativo de interés general anteriormente señalado.

Al respecto, el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (...)

En suma, si el actor consideraba que se le ocasionó un daño, debió instaurar la demanda dentro de los dos (2) años

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

siguientes a la declaratoria de área protegida, que incluye el predio objeto de reclamación.

Guardando las proporciones, vale la pena traer a colación el fragmento de la jurisprudencia citada en la contestación de la demanda: “No puede afirmarse, como lo sugiere la demandante, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contarse desde el 5 de abril de 2002 (cuando el alcalde del municipio de la Cumbre le informó que sus peticiones no fueron tenidas en cuenta en el Esquema de Ordenamiento Territorial y que, según la cartografía del mismo, su predio es un área de protección como bosque natural y área de protección), pues es claro que los daños antijurídicos por los cuales se demanda no se materializaron con dicha respuesta, sino que se concretaron –se insiste- en diciembre de 2000, cuando el Concejo Municipal de La Cumbre aprobó el Esquema de Ordenamiento Territorial de dicho municipio, pues fue a partir de ese momento en que se definió todo lo concerniente al ordenamiento territorial del municipio de La Cumbre y se estableció que el predio Hacienda La Cabaña hacía parte de un área de protección como bosque natural y reserva forestal”

Así las cosas, es menester resaltar que la acción de reparación directa instaurada por la señora Rocío del Carmen Gómez Marmol, caducó a partir del mes de agosto de 1977.

Análisis del proceso.

De acuerdo con las pretensiones, es claro que no están llamadas a prosperar en cuanto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues como ya se advirtió, la acción de reparación directa se encuentra caducada.

De la aplicación extensiva del numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones, no son conciliables los asuntos en los cuales haya caducado la acción.

El inmueble objeto de reclamación, fue afectado como área protegida en el año de 1964 conforme se anotó en el análisis de la caducidad de la acción, razón por la cual, las operaciones administrativas posteriores a los dos años siguientes, no son susceptibles de considerarse como fuentes de un daño apto de reparación. Circunstancia jurídica que permanece de forma ininterrumpida a la fecha, ratificado con las disposiciones proferidas en el año de 1997.


Es claro, que al momento en que se ejecuta la operación administrativa, el demandante no logra probar que la ostensión de la posesión del bien inmueble se encontraba amparada por el instrumento legal de la adjudicación en la modalidad de predio baldío, que resultare oponible y por consiguiente susceptible de una contraprestación económica. La Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, entre ellas, la sentencia T-580 del 18 de septiembre de 2017, resaltó los siguientes puntos sobre las características de los bienes baldíos: · Son bienes fiscales adjudicables y, según la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.

· Se presumen como baldíos aquellos que no son o han sido poseídos por particulares, bajo el entendido de que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de dueño.


· El simple hecho de ocupar tierras baldías no le da al correspondiente ciudadano la calidad de poseedor.

· La propiedad de tales bienes solo puede obtenerse mediante título traslativo de dominio otorgado por la ANT.


· Los bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, Así las cosas, es forzoso concluir que la parte demandante, dentro del proceso de acción de reparación directa NO logra allegar la prueba idónea que la acredite como legítimo poseedor del bien inmueble baldío, como sería la resolución de adjudicación proferida por la autoridad

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

	<p>administrativa competente.</p> <p>Lo que significa, que la parte accionante no tiene la vocación que le permita reclamar una indemnización por la pérdida de la posesión del inmueble.</p> <p>Conforme lo resalta la Corte Constitucional, el simple hecho de ocupar tierras baldías, no se constituye en un legítimo poseedor</p> <p>Declaraciones y pretensiones de la demanda.</p> <p>a. Se ordene la reparación integral a favor de la accionante, de todos los perjuicios causados.</p> <p>b. Como consecuencia de lo anterior, se restituya la posesión del bien inmueble en comento, o en su defecto se proceda a su pago en la suma de veinte millones (\$20.000.000), en la modalidad de año emergente, así como el pago de daños morales en una cuantía de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.</p> <p>Síntesis de la contestación de la demanda.</p> <p>En contra de las pretensiones, se interponen las excepciones de caducidad de la acción de reparación directa, inexistencia de la fecha generadora del daño, inexistencia del derecho de dominio por parte del demandante, carencia de responsabilidad del estado, así como la excepción de culpa o hecho exclusivo de la víctima.</p> <p>10. Análisis del precedente judicial.</p> <p>Las excepciones propuestas en contra de las pretensiones, se encuentran fundamentadas en los precedentes jurisprudenciales, destacándose el auto de fecha tres (3) de agosto dos mil seis (2006), proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente con el número de radicación 52001-23-31-000-2005-01660-01(32537), en el que se hace un análisis para la contabilización de los términos de caducidad de la acción de reparación directa:</p> <p>(...)</p> <p>Es posible que, en algunas ocasiones, la concreción o conocimiento del daño sólo se produzca con posterioridad al tiempo de acaecimiento de los hechos dañosos fundamento de la acción, circunstancias en las que se empezará a contar el término de caducidad a partir del momento en que alguna de aquéllas tenga ocurrencia, pues, de lo contrario, se estaría cercenando la posibilidad del acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) y, de otra parte, se colocaría a la persona que padece el detrimento en una situación de incertidumbre en relación con la posibilidad de solicitar la reparación del menoscabo padecido. (...)</p> <p>Otro de los precedentes jurisprudenciales de gran importancia en la defensa de Parques Nacionales Naturales de Colombia pertenece a la sentencia de veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), expedida por el Consejo de Estado, proceso 250002326000200401038 - 02 (41.370), mediante la cual, se resalta que los hechos materia de estudio frente a los daños que pueda generar una operación administrativa, pertenecen a los actos administrativos que crean el gravamen de los bienes inmuebles, y no la operación administrativa propiamente dicha, esto es, que si bien es cierto el estado tiene la facultad legal para crear gravámenes sobre bienes inmuebles y hacerlos efectivos por intermedio de una operación administrativa, también lo es, que el legítimo poseedor tiene derecho a una indemnización:</p> <p>(...)</p> <p>Para la Sala es claro que los daños que reclama la demandante devienen del Decreto 619 de julio de 2000 y del Decreto 903 de diciembre de 2001, mediante los cuales, en su orden, la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y reglamentó lo concerniente a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 114, Modelia, por cuanto fue en estos actos administrativos en el que dichos daños se materializaron, pues en ellos se resolvió todo lo relacionado al ordenamiento territorial de Bogotá y se definió la destinación del predio de la señora Alcira Medina</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

<p>Rúgeles. (...)</p> <p>Conclusiones.</p> <p>Teniendo en cuenta que la parte actora no logra probar el derecho legalmente reconocido como legítimo poseedor del bien inmueble al momento de ejecutarse la operación administrativa, Parques Nacionales Naturales de Colombia no cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho que le permitan presentar una fórmula de arreglo.</p> <p>Es decir, que con el solo hecho de no lograrse probar la legítima posesión del inmueble por parte del accionante, resulta inoperante el estudio de la responsabilidad que pueda tener Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cuanto a la operación administrativa. En otros términos, se le sugiere al Comité de Conciliación y Defensa Judicial no conciliar en el presente caso.</p> <p>Expuesta la ficha, se abre el debate. El Dr. Manuel formula una pregunta, y es si el hecho que origina la demanda que se predique la reparación directa contra parques nacionales cuál es?, a lo que responde el apoderado que de la demanda se infiere que es una acción posesoria donde se recupera la franja de terreno, y en el marco de la acción se ordena el desalojo, pero en la demanda es imprecisos lo hechos, de la acción posesoria. Se precisa por el apoderado que dentro de la demanda se solicita para que se oficie a la alcaldía para que allegue copia del proceso policivo. En el momento de contestación de la demanda se debe solicitar la vinculación de la inspección de policía que adelanto la acción posesoria. Quien genera el hecho de perder la posesión es la operación administrativa. El análisis viene a determinarse si se respeto el debido proceso en la acción posesoria o si el accionante logro determinar un justo titulo que conllevara a la improcedencia la acción posesoria. El Consejo de Estado determina que el justo titulo es el otorgado por la Agencia Nacional de Tierra, el cual no fue allegado.</p> <p>El Dr. Ángelo hizo observaciones o recomendaciones, consistentes en que el señor no tuvo títulos un documento que demostrara que el era el propietario incluso ni de las mejoras por consiguiente no hay lugar a conciliar, y menciona que se enviaron observaciones por correo electrónico.</p> <p>Dra. Astrid pregunta si la fecha de la audiencia fue el pasado 01 de marzo, porque se somete a Comité un tema cuando ya paso la audiencia. Y hace una recomendación que se traigan los temas oportunamente a Comité, porque es el escenario de debate y toma de decisiones. Se requiere hacer los aportes oportunamente.</p> <p>Desde Secretaría se solicita que las observaciones sean remitidas al correo electrónico de la Secretaria Técnica, y ante la observación de la exposición de fichas después de agotada la audiencia inicial el código general del proceso y CPACA permite presentar formulas de arreglo hasta la sentencia de primera instancia de manera que el Comité tiene la facultad de cambiar el sentido de la decisión.</p> <p>La Dra Astrid sugiere que se revise y complemente la ficha con las observaciones realizadas. Dr Manual menciona dos elementos adicionales para complementar la ficha, uno es que si hay una actuación policiva que es la que genera que pierda la ocupación la decisión en ultimas que origino el perjuicio es la decisión policiva en ese caso es la falta de legitimación para incluirlo en la ficha, porque no podemos conciliar en un aspecto que decidió otra autoridad.</p> <p>Y otro aspecto es que el hecho que origina el perjuicio es la decisión policiva ahí creo que la acción judicial que se</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

utilizaría es la acción de nulidad y para eso debería tener la fecha en que se tomo la decisión policiva contar los 4 meses y no seria la reparación directa porque no es una actuación sino la decisión policiva, con esto queda fuere el argumento.

En tercer lugar es que los baldíos al tener un régimen especial en parques nacionales no se puede adjudicar baldíos en parques nacionales. Si el interesado tiene un titulo de adjudicación debería ser anterior a la declaración del parque porque si es posterior obviamente no se podría adjudicar art, 13 ley 2 de 1959. Con los elementos expuestos se puede complementar la ficha y se puede votar la ficha como fue expuesta.

El apoderado manifiesta que en la ficha se abordan los temas de caducidad, de la falta de titulo y que se realizarían las observaciones.

Dra. Gladys manifiesta que se debe revisar los formatos que maneja la ANDJE y tener un contexto con mayor profundidad del caso que se va a debatir, y recomienda que se vuelva a presentar la ficha, a lo que el apoderado manifiesta que la ficha contiene los elementos de la ficha.

Desde Secretaría se retoman las observaciones realizadas y la solicitud de la Dra. Gladys, y se recomienda que se someta a votación el asunto con el compromiso de complementar la ficha.

Dr. Manuel sugiere rearmar la ficha y que se vote en el siguiente Comité, y sugiere que aspectos en los antecedentes requiere que se amplié con las observaciones de Control Interno. Indica que la ficha que debe ser circulada a los miembros del Comité es la revisada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.


Dra. Astrid pide que por el apoderado se tenga en cuenta las consideraciones de los miembros.

Por lo que se concluye de manera unánime por los miembros del Comité acoger la observación de la Dra. Gladys del Grupo de Control interno, y que debe complementarse la ficha con las observaciones expuestas y debe volverse a someter a Comité.


Se le da el uso de la palabra al apoderado para que exponga el segundo asunto en el orden del día:

2. Ficha Convocante Owen Santiago Ivor Jones Hugues convocado Parques Nacionales Naturales de Colombia, Procuraduría 155 Judicial II para asuntos Administrativos de Santa Marta, radicado E-2022-735815.

De la lectura integral del escrito, se infiere que el convocante previo a la expedición de la resolución 191 del 31 de agosto de 1964 proferida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, que alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos, ostentaba la aprehensión material de una franja de terrero ubicada en el sector de Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta, la cual hace parte integral del citado parque. Al parecer, se colige que el convocante como consecuencia de una operación administrativa, perdió la tenencia del citado inmueble. 2. Hechos - Complemento a los descritos en el registro relacionado. Cabe destacar, que la parte convocante en su escrito de

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011


<p>conciliación prejudicial, no logra precisar cuál fue la causa por la cual generó la pérdida de la tenencia del bien inmueble, como tampoco se precisa la fecha. Esto es, no logra identificar el nexo jurídico que pueda existir entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y el hecho de perder la tenencia del inmueble por parte del convocante. Se hace una descripción general de la naturaleza jurídica de los predios baldíos, la evolución normativa frente a su adjudicación, entre otros, así como la mención de las normas que rigen las áreas protegidas y su destinación, mencionando de manera aislada que el terreno objeto de indemnización no tenía la calidad de baldío. 3. Pruebas allegadas al caso por las partes. El convocante, solicita que se tenga como prueba: “Hecho notorio respecto del despojo y destrucción de las viviendas yacentes en el predio del sector de Bonito Gordo, pues Se publicó en todos los diarios y redes sociales nacionales y especialmente de la ciudad de Santa Marta DTCH; por tanto no requiere probarse (art 167 del CGP)”, contrato de compraventa y una declaración extra juicio 4. Objeto de solicitud de conciliación. Se le restituya el bien inmueble o en su defecto se le reconozca en calidad de indemnización los valores pertenecientes a los daños causado por la pérdida de la tenencia del referido inmueble. De no llegarse a un acuerdo conciliatorio, se declare agotado en legal forma el requisito de procedibilidad para instaurar la respectiva acción de reparación directa. 5. Principal problema jurídico Se requiere de terminar, sí a consecuencia del proceso policivo de desalojo y desmonte de la construcción realizada por el accionante (Operación administrativa), generó un daño que comporte el reconocimiento de una indemnización a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 6. Análisis de caducidad y/o prescripción. Teniendo en cuenta que la parte convocante hace una enunciación somera de un presunto despojo de la tenencia de una franja de terreno y la demolición de una construcción, se infiere que se trató de la recuperación del mismo por autoridad competente fundamentado legalmente en que dicha franja hace parte integral del Parque Nacional Natural Tayrona (Operación Administrativa). Así las cosas, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de la jurisdicción de contencioso administrativo, es viable considerar que todas aquellas pretensiones en relacionadas con predios baldíos que se quieran hacer efectivas por la cuerda procesal de la acción de reparación directa, la caducidad se contabiliza a partir de los dos años siguientes a la ocurrencia y/o conocimiento de los hechos. Para el caso que nos ocupa, es de señalar que mediante resolución 191 del 31 de agosto de 1964 expedida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, se alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos. De igual manera, se cuenta con la resolución 21 del 23 de abril de 1975 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución ejecutiva 177 del 16 de junio de 1975, publicada en el diario oficial 34361 del 21 de julio de 1975, resoluciones que incorporan unos predios al área y el régimen legal Parque Nacional Natural Tairona. En ese orden de ideas, a pesar que la parte convocante no precisa los hechos y la fecha, en gracia de discusión de aceptarse que ostentaba la posesión del inmueble previo a las resoluciones anteriormente mencionadas, el término de caducidad de dos años debe contarse a partir del 22 de julio de 1975. Es decir, que el globo de terreno donde hace parte el predio objeto de reclamación, se graba como reserva forestal a partir del 21 de julio de 1975, fecha de publicación del acto administrativo de interés general anteriormente señalado. Al respecto, el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (...) En suma, si el actor consideraba que se le ocasionó un daño, debió instaurar la demanda dentro de los dos (2) años siguientes a la declaratoria de área protegida, que incluye el predio objeto de reclamación. Guardando las proporciones, vale la pena traer a colación el fragmento de la</p>

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

jurisprudencia citada en la contestación de la demanda: “No puede afirmarse, como lo sugiere la demandante, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contarse desde el 5 de abril de 2002 (cuando el alcalde del municipio de la Cumbre le informó que sus peticiones no fueron tenidas en cuenta en el Esquema de Ordenamiento Territorial y que, según la cartografía del mismo, su predio es un área de protección como bosque natural y área de protección), pues es claro que los daños antijurídicos por los cuales se demanda no se materializaron con dicha respuesta, sino que se concretaron –se insiste- en diciembre de 2000, cuando el Concejo Municipal de La Cumbre aprobó el Esquema de Ordenamiento Territorial de dicho municipio, pues fue a partir de ese momento en que se definió todo lo concerniente al ordenamiento territorial del municipio de La Cumbre y se estableció que el predio Hacienda La Cabaña hacía parte de un área de protección como bosque natural y reserva forestal” Así las cosas, es menester resaltar que la acción de reparación directa que pretende instaurada el convocante, caducó a partir del mes de agosto de 1977.

7. Análisis del caso. De acuerdo con las pretensiones, es claro que no están llamadas a prosperar en cuanto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues como ya se advirtió, la acción de reparación directa se encuentra caducada. De la aplicación extensiva del numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2002 por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones, no son conciliables los asuntos en los cuales haya caducado la acción. El inmueble objeto de reclamación, fue afectado como área protegida en el año de 1964 conforme se anotó en el análisis de la caducidad de la acción, razón por la cual, las operaciones administrativas posteriores a los dos años siguientes, no son susceptibles de considerarse como fuentes de un daño apto de reparación. Circunstancia jurídica que permanece de forma ininterrumpida a la fecha, ratificado con las disposiciones proferidas en el año de 1997. Es claro, que al momento en que se ejecuta la operación administrativa, el demandante no logra probar que la ostensión de la posesión del bien inmueble se encontraba amparada por el instrumento legal de la adjudicación en la modalidad de predio baldío, que resultare oponible y por consiguiente susceptible de una contraprestación económica. Obsérvese que en la solicitud de conciliación no se allega el instrumento idóneo que le permita acreditar la legalidad de la posesión del predio baldío. La Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, entre ellas, la sentencia T-580 del 18 de septiembre de 2017, resaltó los siguientes puntos sobre las características de los bienes baldíos: Son bienes fiscales adjudicables y, según la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. · Se presumen como baldíos aquellos que no son o han sido poseídos por particulares, bajo el entendido de que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de dueño. · El simple hecho de ocupar tierras baldías no le da al correspondiente ciudadano la calidad de poseedor. · La propiedad de tales bienes solo puede obtenerse mediante título traslativo de dominio otorgado por la ANT. · Los bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables Así las cosas, es forzoso concluir que la parte convocante, dentro de la solicitud de conciliación prejudicial NO logra allegar la prueba idónea que la acredite como legítimo poseedor del bien inmueble baldío, como sería la resolución de adjudicación proferida por la autoridad administrativa competente. Lo que significa, que la parte convocante no tiene la vocación que le permita reclamar una indemnización por la pérdida de la posesión del inmueble. Conforme lo resalta la Corte Constitucional, el simple hecho de ocupar tierras baldías, no se constituye en un legítimo poseedor


8. Análisis del precedente jurisprudencial De instaurarse la acción de reparación directa en contra de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se tiene como mecanismo de defensa la excepción de la caducidad de la acción soportada en el precedente jurisprudencial, destacándose el auto de fecha tres (3) de agosto dos mil seis (2006), proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente con el número de radicación 52001-23-31-000-2005-01660-01(32537), en el que se hace un análisis para la contabilización de los términos de caducidad de la acción de reparación directa. (...) Es posible que, en algunas ocasiones, la concreción o conocimiento del daño sólo se produzca con posterioridad al tiempo de acaecimiento de los hechos dañosos fundamento de la acción, circunstancias en las que se empezará a contar el

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

término de caducidad a partir del momento en que alguna de aquéllas tenga ocurrencia, pues, de lo contrario, se estaría cercenando la posibilidad del acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) y, de otra parte, se colocaría a la persona que padece el detrimento en una situación de incertidumbre en relación con la posibilidad de solicitar la reparación del menoscabo padecido. (...) Otro de los precedentes jurisprudenciales de gran importancia en la defensa de Parques Nacionales Naturales de Colombia pertenece a la sentencia de veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), expedida por el Consejo de Estado, proceso 250002326000200401038 - 02 (41.370), mediante la cual, se resalta que los hechos materia de estudio frente a los daños que pueda generar una operación administrativa, pertenecen a los actos administrativos que crean el gravamen de los bienes inmuebles, y no la operación administrativa propiamente dicha, esto es, que si bien es cierto el estado tiene la facultad legal para crear gravámenes sobre bienes inmuebles y hacerlos efectivos por intermedio de una operación administrativa, también lo es, que el legítimo poseedor tiene derecho a una indemnización: (...) Para la Sala es claro que los daños que reclama la demandante devienen del Decreto 619 de julio de 2000 y del Decreto 903 de diciembre de 2001, mediante los cuales, en su orden, la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y reglamentó lo concerniente a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 114, Modelia, por cuanto fue en estos actos administrativos en el que dichos daños se materializaron, pues en ellos se resolvió todo lo relacionado al ordenamiento territorial de Bogotá y se definió la destinación del predio de la señora Alcira Medina Rugeles. (...) Así mismo, se cuenta con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, los máximos tribunales de cierre, entre ellos el Consejo de Estado, coinciden en afirmar que es la carencia de un interés sustancial que permita al demandante ser vinculado al proceso y por consiguiente tenga el deber de reparar los presuntos daños generados por acción o por omisión. El Consejo de Estado en su abundante jurisprudencia, entre ellas, la sentencia del 9 de agosto de 2012, proceso 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP), manifestó: "EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA – Prospera al no demostrarse existencia de relación jurídica sustancial. De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. En tal orden, cabe destacar que al expediente no se allegó prueba de ningún vínculo existente entre la citada sociedad y el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, razón por la cual no es dable condenar a una sociedad sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acreditó la existencia de una relación jurídica-sustancial." Esto en el sentido que Parques Nacionales Naturales de Colombia no tiene la facultad legal directa para decretar y elevar a rango predios con el carácter de áreas protegidas. 9. Conclusiones. Teniendo en cuenta que la parte convocante no logra probar el derecho legalmente reconocido como legítimo poseedor del bien inmueble al momento de ejecutarse la operación administrativa, Parques Nacionales Naturales de Colombia no cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho que le permitan presentar una fórmula de arreglo.

Dr. Manuel concluye la exposición que realiza el apoderado indicando que el interesado no plantea elementos concretos, son muy generales y con los elementos que se tienen no hay elementos para poder conciliar. Se sugiere aprobar la posición que plantea el apoderado.

Se retoma por secretaria técnica las observaciones presentadas por el Dr. Ángelo enviadas por correo electrónico respecto a la redacción de palabras que resultan imprecisas, y respecto a la observación de la pérdida de tenencia debe precisarse en la redacción de la ficha. El apoderado responde que se incluyeron redacciones propias de la demanda y se acogen las observaciones.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

Dra. Astrid, sugiere que se vote en el comité y que se realicen las observaciones, Dr. Manuel pide que en la ficha se indique el que accionante no es claro a lo que asiente el Dr. Ángelo, manifestando que lo que se busca las observaciones es claridad en la ficha, manifestando que están de acuerdo con no proponer formula de arreglo.

Expuestas las consideraciones y observaciones, se somete a votación la recomendación expuesta en la ficha de conciliación. Se da paso a que se realice la votación de la propuesta que hace el abogado, o si se requiere presentar otro análisis u otra propuesta, se le da uso de la palabra a cada uno de los miembros para que manifiestan unánimemente la decisión es de no conciliar ni aceptar formula de arreglo por las consideraciones expuestas y con los ajustes solicitados.

3. Zaida Milena García Manjarrez

FICHA DE CONCILIACION JUDICIAL PROCESO DE ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA SAIDA MILENA GARCÍA MANJARRÉS Y OTROS

1. Partes del proceso o caso.

Demandante: Saida Milena García Manjarrez y Otros

Demandado: Nación - Ministerio del Interior- Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible- MinDefensa - Ejercito Nacional- Policía Nacional y Otros.


2. Hechos.

Se argumenta como hechos, que el señor Orrego León Wilton Fueder (q.e.p.d.) prestó sus servicios a Parques Nacionales Naturales de Colombia en calidad de contratista, cumpliendo con las actividades diarias que le fueron encomendadas propias de las funciones de la entidad. Según los demandantes, el señor Orrego León Wilton Fueder asumió riesgos en su integridad personal por las actividades que realizaba, en relación con algunos procesos sancionatorios por la ocupación ilegal de predios por parte de la comunidad en las veredas Don Diego, Marquetalia y Perico Aguao sector la Lengüeta, Jurisdicción del Corregimiento de Guachaca, Santa Marta, cuyas actividades de control ambiental, le generó fricciones con los habitantes de la zona y algunos grupos al margen de la ley, incluso en inmediaciones de donde residía con su familia.

Teniendo en cuenta los riesgos que padecía los habitantes de la región, así como las personas que prestan sus servicios a Parques Nacionales Naturales de Colombia, el 5 de abril de 2018, la Defensoría del Pueblo (Regional Magdalena), el Director Territorial del Área de Parques Nacionales en compañía del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, convocaron a las autoridades regionales, departamentales y nacionales, incluida la fuerza pública y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de poner de presente y analizar la problemática de orden público que padece la comunidad, sin que se hubieran adoptado medidas al respecto. El 14 de enero de 2019, a criterio de los demandantes, el señor Orrego León Wilton Fueder fue asesinado por los grupos armados de la zona al margen de la ley.

3. Hechos - Complemento a los descritos en el registro relacionado.

Los accionantes resaltan que el señor Orrego León Wilton Fueder en diferentes ocasiones puso de presente a Parques

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011


Nacionales Naturales de Colombia y a las autoridades competentes de los riesgos que está padeciendo por el ejercicio de sus funciones, sin que hubiera logrado una respuesta efectiva sobre el particular.

4. Pruebas allegadas al caso por las partes

Demandante:

- Por parte de los demandantes, se solicita como prueba el decreto de testimonios.
- Se oficie a la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia para que informe los criterios de seguridad que tuvo para desestimar las amenazas que se cernían sobre el personal que estaba a su cargo en el Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo cuando ya existían una Alerta Temprana de la Defensoría y los comunicados de la Directora Regional Caribe de la misma entidad, así como de los trabajadores y de la Comunidad. De igual manera, se requiera a la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia con el propósito de que se indique, si el occiso se encontraba en proceso de contratar sus servicios, y de ser así, en que etapa culminó dicho proceso.
- De acuerdo con las funciones atribuidas por el ordenamiento legal correspondiente, se solicita que se oficie al Ministerio de Defensa Nacional para que informe que medidas se adoptaron encaminadas a neutralizar o desarticular las bandas criminales en el Corregimiento de Guachaca Sierra Nevada de Santa Marta, que continuamente amenazaban a las comunidades de la zona y a los trabajadores de Parques Nacionales de la Sierra Nevada de Santa Marta, y si en algún momento realizaron recomendaciones o se reunieron con estos para tratar el tema de seguridad. De igual manera, informe al despacho, las medidas tomadas ante la Alerta Temprana No. 045 - 18 de fecha 7 de mayo del 2018 de la Defensoría del Pueblo, y que otras medidas ante la comunicación del mes de abril del 2018 (radicado 20186710002221), firmada por la Defensoría Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Directora Regional Caribe.

De otra parte, se informe al despacho, las medidas de protección tomadas por la Institución (Policía Metropolitana de Santa Marta) ante la solicitud hecha por la Fiscalía General de la Nación firmada por JEINER LUIS CARRILLOCADENA, encaminadas a la protección de los trabajadores de Parques Nacionales de la Sierra Nevada, (Solicitud medida de protección policía nacional) de fecha 13 de noviembre del 2018, un mes antes de la muerte del señor ORREGO LEON. - Se requiera al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que informe en relación con las medidas que se profirieron frente a la Alerta Temprana N° 045- 18 A.I., de fecha 7 de mayo del 2018, emitida por la Defensoría del Pueblo, situación que también le fue comunicada en el mes de abril del 2018, en donde firma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defensoría y la Directora Regional Caribe Parques Nacionales. - Se le solicite a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena, para que aporte o allegue el proceso penal que se originó con la denuncia presentada por el señor Tito Rodríguez Torres, Jefe de Parques Nacionales en la Sierra Nevada de Colombia, el cual correspondió el radicado N° FPJ - 2 – 470016099101201805513 de fecha 13 de noviembre del 2018, de igual manera, se remitan las ordenes de policía judicial que se pudieron impartir dentro del mismo y la solicitud del 13 de noviembre que requería medida de protección para los trabajadores de Parques Nacionales Sierra Nevada. - Se requiera a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, para que remita la información que tenga en sus archivos con relación a la Alerta Temprana No. 045-18 A.I., de fecha 7 de mayo del 2018, que advertía sobre la presencia de grupos armados y la zona, esto es, en el Corregimiento de Guchaca – Vereda Don Diego, y que otras advertencias se le dieron a conocer a las autoridades legalmente constituidas en aras de la defensa del territorio y sus comunidades, y de los trabajadores y contratistas de Parques Nacionales de la SIERRA Nevada de Santa Marta.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

Demandado:

Por parte de la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia no se solicita el decreto de pruebas.

5. Principal problema jurídico

Se requiere establecer si por parte de la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho que le permitan presentar una fórmula de arreglo frente a una eventual condena por la muerte violenta de una persona. Persona que, al momento del deceso no tenía ningún vínculo jurídico con la Entidad.

6. Análisis de la caducidad de la acción y/o la prescripción de los derechos.


Teniendo en cuenta que el deceso de la persona acaeció el 14 de enero de 2019, se evidencia que la acción de reparación directa fue instaurada dentro del término legal establecido en el artículo en el literal i) del numeral segundo del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; Al respecto, es de señalar que la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el año 2020, tal y como se desprende del número de radicación 0145-2020 dado por la Procuraduría 43 Judicial II Administrativa de Santa Marta, lo que deduce que la acción judicial se presentó dentro del término legal.

7. Análisis del proceso.


Sea lo primero poner de presente que la parte accionante no logra allegar y/o enunciar alguna prueba que infiera una falla en el servicio atribuible a la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia. Es menester destacar, que el propio demandante como fundamento de la demanda advierte que el 13 de noviembre del 2018, el señor Tito Rodríguez Torres, Jefe de Parques

Nacionales en la Sierra Nevada de Colombia con el radicado No. FPJ - 2 –470016099101201805513 presentó ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena, escrito en el cual se solicitaba medidas de protección para los trabajadores de Parques Nacionales Sierra Nevada. Así las cosas, queda demostrado que la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia no fue ajena a las advertencias dadas por el señor Orrego León Wilton Fueder (q.e.p.d.), adelantando todas las medidas necesarias que se encontraban a su alcance, como fue la de presentar ante la entidad competente la solicitud para que se brindara la seguridad a las personas que se encontraban vinculadas a la Unidad.

Sobre el particular, es claro señalar que dentro de las funciones legales a cargo de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia establecidas en el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, no se encuentra las de prestar seguridad a las personas vinculadas a la entidad que a su consideración se encuentran en riesgo su integridad personal por parte de grupos delincuenciales, a consecuencia del ejercicio de sus funciones. De tal manera, que frente a las denuncias de zozobra puestas de presente por el señor Orrego León Wilton Fueder a Parques Nacionales Naturales de Colombia, la única alternativa legal era trasladarlas a la autoridad competente como es la Fiscalía General de la Nación, como sabiamente procedió el señor Tito Rodríguez Torres, Jefe de Parques Nacionales en la Sierra Nevada de Colombia. El Consejo de Estado en su abundante precedente jurisprudencial, entre ellas, la sentencia del 8 de mayo de 2016, proceso 25000232600020050088301 (38139), fijó los elementos concurrentes esenciales para que se pueda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, así:

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

<p>1) Un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o a varios individuos.</p> <p>2) Una conducta, activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública y</p> <p>3) Cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre esta y aquél, vale decir, “que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada”</p> <p>En este orden de ideas, es menester resaltar que al momento del fallecimiento del señor Orrego León Wilton Fueder, 14 de enero de 2019, no existe ninguna relación jurídica vigente, es decir, entre el mencionado señor y Parques Nacionales Naturales de Colombia, denotándose entonces, la usencia del requisito de la existencia de una relación o nexo causal entre las partes que permita una condena en legal forma.</p> <p>En otras palabras, al momento que se acaece la muerte del señor Orrego León Wilton Fueder, no se encontraba vinculado a la entidad a través de un contrato de prestación de servicios vigente.</p> <p>Así las cosas, el asiste a favor de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.</p> <p>8. Declaraciones y pretensiones de la demanda. Se reconozca y pague los daños materiales en la modalidad de lucro cesante la suma 525.916.578 a favor de los demandantes. Por perjuicios morales la suma de \$ 570.571.950 Por daños inmateriales, fisiológicos y a la vida de relación el valor de \$ 570.571.950 Por daños derivados de derechos constitucional y convencionalmente protegido la cantidad \$175.860.600</p> <p>9. Síntesis de la contestación de la demanda.</p> <p>Como columna vertebral de la defensa por parte la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia se interponen las excepciones de inexistencia de un vínculo contractual vigente al momento del deceso del señor Orrego León Wilton Fueder, inexistencia de responsabilidad y de pruebas entre la muerte del señor Orrego y las labores desempeñadas en la Unidad, excepción ausencia de funciones de seguridad y control de orden público en cabeza de PNNC, y la excepción inexistencia de prueba de los perjuicios reclamados.</p> <p>10. Análisis del precedente judicial.</p> <p>De las excepciones propuestas, especialmente la falta de legitimación en la causa por pasiva, cuenta con el respaldo de un caudal jurisprudencial, cuyo criterio es recogido por los máximos tribunales judiciales de cierre, en este aspecto, el Consejo de Estado en sentencia del 9 de agosto de 2012, radicado 2010-00472-01(AP), en la parte pertinente preceptuó:</p> <p>“EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA</p> <p>– Prospera al no demostrarse existencia de relación jurídica sustancial.</p> <p>De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. En tal orden, cabe destacar que al expediente no se allegó prueba de ningún vínculo existente entre la citada sociedad y el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, razón por la cual no es dable</p>

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

condenar a una sociedad sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acreditó la existencia de una relación jurídica-sustancial.”

11. Conclusiones.

Es claro, que al momento del fallecimiento del señor Orrego León Wilton Fueder no tenía ningún vínculo contractual vigente con la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia, razón por la cual, no existe un nexo causal directo entre el deceso y las funciones de la Entidad, que permitan la consideración de una presunta falla en el servicio. Por otra parte, dentro de las funciones atribuidas legalmente a la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia, no se encuentra las de garantizar el orden público y velar por la vida, honra, y bienes de las personas.

En gracia de discusión, de contemplarse una eventual responsabilidad solidaria de las entidades demandas, existe a favor de la Unidad Administrativa Espacial Parques Nacionales de Colombia la prueba aportada por los demandantes que la exime de toda responsabilidad, tal y como se destacó anteriormente, previo al fallecimiento del señor Orrego León Wilton Fueder, el señor Tito Rodríguez Torres, Jefe de Parques Nacionales en la Sierra Nevada de Colombia con el radicado No. FPJ - 2 – 470016099101201805513 presentó ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena, escrito en el cual se solicitaba medidas de protección para los trabajadores de Parques Nacionales Sierra Nevada.


Así las cosas, se le recomienda al Comité de Conciliación y Defensa Judicial no proponer ninguna fórmula de arreglo frente a las pretensiones debatidas dentro del proceso judicial correspondiente.

Se abre a discusión este asunto y se pasa a leer las recomendaciones de las observaciones del Dr. Ángel, quien manifiesta que es un caso sensible, la persona fallecida no contaba con contrato con la Entidad y algunas observaciones de forma o redacción del documento, concluyendo que se encuentra de acuerdo con la exposición realizada en la ficha y esta de acuerdo con la postura presentada por el apoderado, Parques presento en debida forma el caso ante la Fiscalía.

Dra. Astrid, si bien no existe ningún vínculo contractual ni laboral, los antecedentes de la alerta realizada previamente al suceso debe revisarse el tema probatorio. A lo que responde el Apoderado que el escrito presentado por el jefe del parque que puso de presente el tema a la fiscalía que es la Entidad competente e una prueba suficiente. La Dra. Astrid sugiere que el enfoque que debe darse en el tema de orden público.

Dr. Manuel se refiere al oficio que envía el jefe del Parque a la Fiscalía, donde solicita medidas de protección, para indicar que lo clave no para la ficha, pero si para el proceso judicial, es si la Fiscalía en que sentido contesto, porque esto pudo dar traslado a otra entidad. porque la fiscalía no brinda medidas de protección. Los presuntos actores son los generadores del daño ante un tema de víctimas.

Expuestas las consideraciones y observaciones, se somete a votación la recomendación expuesta en la ficha de conciliación. Se da paso a que se realice la votación de la propuesta que hace el abogado acogiendo se le da uso de la palabra a cada uno de los miembros para que manifiestan la decisión quienes unánimemente manifiestan acogerse a las recomendaciones expuestas por el apoderado, especialmente por considerar que no existe un nexo causal directo entre el deceso del señor Orrego León y las funciones de la Entidad, que permitan la consideración de una presunta falla en el servicio.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

4.	<p>Proposiciones y Varios. Dra Gladys manifiesta que se converso con el Jefe de la OAJ para que la información se brinde en horas de la tarde.</p> <p>Se da por finalizada la sesión.</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

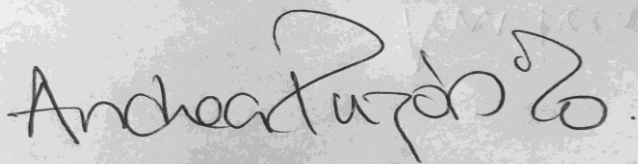
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN No se presentaron.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
Elaboración del Acta de Comité	Andrea Pinzón T.	06 de marzo 2023
Certificación	Andrea Pinzón T.	06 de marzo de 2023

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

--	--	--	--

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	AREA- DEPENDENCIA - ENTIDAD	FIRMA
ANDREA PINZON TORRES	Secretaria Técnica	

Elaboró:

Andrea Pinzón Torres – Secretaria Técnica Comité de Conciliación y Repetición.

Documentos anexos al acta:

Ficha estudio viabilidad de Conciliación Judicial o Extrajudicial

Registro de asistencia.



Sesión Ordinaria Comité de Conciliación

Lunes, 6 de marzo de 2023 · 08:30 – 09:30



Unirme con Google Meet

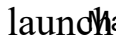
content_copy

meet.google.com/svi-fbjh-yoz



Unirse por teléfono

(CO) +57 601 8957238 PIN: 113 652 553#



Más números de teléfono



Tomar notas de la reunión

Crea un documento para tomar notas



11 invitados

3 sí

8 en espera



keyboard_arrow_down



Estimados miembros del comité e invitados, reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud presentada por el apoderado de la Entidad Dr. Neil Lozano, me permito convocar a sesión ordinaria del mes de Marzo para el miércoles 1 de marzo a las 4 pm, que se reprograma para el 06 de marzo a las 8:30 a.m. a 9:30 a.m. esta sesión se convoca presencial en la Sala Pisba piso 8 Parques Nacionales y por medios virtuales con apertura a las 8:30 para lo cual se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum. Vale recordar que para efectos de la verificación del Quórum en sesión virtual, además de su participación en la sesión, se considerará las observaciones y sentido de la decisión que se manifieste por medios electrónicos (correo electrónico) con copia a todos los miembros e invitados del Comité. En ese sentido se invita a que se pronuncien en el tiempo estimado para la sesión. De acuerdo con los asuntos a someter se convoca al Director Territorial Caribe.

2. Informar inasistencia, impedimento o recusación . Si alguno de los miembros considera que en razón a los asuntos tratados se encuentra incurso en causal que le impida pronunciarse sobre alguno de los temas sometidos a Comité, deberá manifestarlo previamente a la Sesión para informar por esta Secretaría a los

miembros del Comité, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 342 de 2021 <https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2021/12/resolucion-no-342-por-la-cual-se-actualiza-el-comite-de-conciliacion-y-defensa-judicial.pdf>

3. Asuntos a estudio y decisión: Se propone evaluar procedencia no de proponer fórmula de conciliación en cada uno de los siguientes asuntos:

1. Solicitud de conciliación prejudicial convocante Owen Santiago Ivor Jones Hugues convocado Parques Nacionales Naturales de Colombia, Procuraduría 155 Judicial II para asuntos Administrativos de Santa Marta, radicado E-2022-735815
2. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Rocío Gómez Mármol contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Otro, Tribunal Administrativo del Magdalena, radicado 2022-00024-00.
3. Audiencia inicial proceso de reparación directa de Saida Milena García Manjarrez y Otros contra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Otros, Juzgado Noveno Administrativo Del Circuito Judicial de Santa Marta, radicado 2022-00024-00.

Las fichas técnicas se remitirán una vez se envíen por el apoderado de la Entidad previo a la sesión del Comité.

4. Varios: Si alguno de los miembros del Comité considera algún tema adicional que deba ser tratado en esta sesión, le solicito informar de manera previa, para contemplar incluirlo en la agenda, teniendo en cuenta las competencias dadas a esta instancia mediante al Decreto 1716 de 2009. Cordial saludo,

Secretaria Técnica Comité de Conciliación

attach file



FICHA CONCI...



FICHA DE CO...




FICHA DE CO...



10 minutos antes

eventapinzon@parquesnacionales.gov.co

¿Asistirás?

		<p align="center">LISTA DE ASISTENCIA</p>				Código: GD_FO_02 Versión: 5 Vigente desde 24/06/2021	
OBJETIVO DEL EVENTO: Comité Conciliación Sesión Ordinaria mes de Marzo de 2023.		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO					
		Nombre Completo		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida			
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)				TIPO DE REUNION: Video conferencia <input type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/>			
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK		Sala Puracé Evo Piro		FECHA: 08/03/2023		HORA FIN:	
PARTICIPANTES							
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Gladys Espitia Peño	GCI.	gladys.espitia@pmc.	3450	X		
2	Nel Lozano	OAS	Nel.Lozano@p.	315301171	X		
3	Adrián del castillo	SA y r	adriandecastillo@	—	X		
4	Manuel Avila Olarte	Jurídica	manuel.avila@perger	3214145954	/		Manuel Avila
5	Ample Quintero	SSNA	an —			X	
6	Andrea Piraón T.	OAS	andrea.piraon@psu		X		Andrea
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

FICHA DE CONCILIACION JUDICIAL
PROCESO DE ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA
ROCÍO GÓMEZ MÁRMOL

1. Partes del proceso o caso.

Demandante: Rocío del Carmen Gómez Marmol

Demandado: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales Naturales de Colombia

2. Hechos.

De la lectura integral del acápite de la demanda, no se logra establecer con precisión los hechos y la fecha de su materialización, que comportan presuntamente la generación de un daño susceptible de reparación a cargo de las entidades demandadas.

La parte accionante, hace la salvedad que el presente proceso no pretende demandar una operación administrativa, infiriéndose entonces, que la parte demandante perdió la posesión de una franja de terreno baldía a consecuencia de una operación administrativa, valga la redundancia.

3. Hechos - Complemento a los descritos en el registro relacionado.

Cabe resalta, que la parte accionante argumenta como hecho relevante, que previo a expedirse la Ley 2 de 1959 (Mediante la cual se declara entre otras cosas, son Parques Nacionales Naturales aquellas zonas que el gobierno nacional delimite y reserve de manera especial, por medio de decretos en las distintas zonas del país), ya ostentaba la aprehensión material del bien inmueble.

Inmueble que según la parte actora se encuentra ubicado en sector denominado Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta con una extensión aproximada de 14 hectáreas.

4. Pruebas allegadas al caso por las partes

Demandante:

- Se considera como hecho notorio la demolición de los inmuebles ubicados en el sector denominado Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta.
- Informe de perito evaluador.
- Solicitud de pruebas testimoniales.

Demandado:

- Se solicita interrogatorio de parte
- Documentales:
 1. Resolución 21 de 1975 del INCORA.
 2. Memorando PNNC respuesta permisos GTEA

3. Memorando PNNC información construcciones ilegales PNN Tayrona Sector Granate
4. Folio Matrícula Inmobiliaria No. 080-4164
5. Acuerdo 4 de 1969 del INDERENA
6. Acuerdo 292 DE 1969 del Ministerio de Agricultura
7. Informe sobrevuelo de reconocimiento infraestructuras ubicadas en el sector Bonito Gordo al interior del Parque Nacional Natural Tayrona.

- Se solicita que se oficie a la Inspección de Policía (Alcaldía de Santa Marta), con el propósito de que se allegue copia del expediente policivo en relación con las ocupaciones ilegales y las diligencias de desalojo y desmonte de los predios que ocupaban el PNN TAYRONA

5. Principal problema jurídico

Se requiere de terminar, sí a consecuencia del proceso policivo de desalojo y desmonte de la construcción realizada por el accionante (Operación administrativa), generó un daño que comporte el reconocimiento de una indemnización a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

6. Análisis de la caducidad de la acción y/o la prescripción de los derechos.

De acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de la jurisdicción de contencioso administrativo, es viable considerar que todas aquellas pretensiones en relacionadas con predios baldíos que se quieran hacer efectivas por la cuerda procesal de la acción de reparación directa, la caducidad se contabiliza a partir de los dos años siguientes a la ocurrencia y/o conocimiento de los hechos.

Para el caso que nos ocupa, es de señalar que mediante resolución 191 del 31 de agosto de 1964 expedida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, se alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos.

De igual manera, se cuenta con la resolución 21 del 23 de abril de 1975 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución ejecutiva 177 del 16 de junio de 1975, publicada en el diario oficial 34361 del 21 de julio de 1975, resoluciones que incorporan unos predios al área y el régimen legal Parque Nacional Tairona.

En ese orden de ideas, obsérvese que la demanda se fundamenta en que el accionante ostentaba la posesión del predio antes del año 1959, de tal manera, que el término de caducidad de dos años debe contarse a partir del 22 de julio de 1975.

Es decir, que el globo de terreno donde hace parte el predio objeto de reclamación, se graba como reserva forestal a partir del 21 de julio de 1975, fecha de publicación del acto administrativo de interés general anteriormente señalado.

Al respecto, el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (...)

En suma, si el actor consideraba que se le ocasionó un daño, debió instaurar la demanda dentro de los dos (2) años siguientes a la declaratoria de área protegida, que incluye el predio objeto de reclamación.

Guardando las proporciones, vale la pena traer a colación el fragmento de la jurisprudencia citada en la contestación de la demanda:

“No puede afirmarse, como lo sugiere la demandante, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contarse desde el 5 de abril de 2002 (cuando el alcalde del municipio de la Cumbre le informó que sus peticiones no fueron tenidas en cuenta en el Esquema de Ordenamiento Territorial y que, según la cartografía del mismo, su predio es un área de protección como bosque natural y área de protección), pues es claro que los daños antijurídicos por los cuales se demanda no se materializaron con dicha respuesta, sino que se concretaron –se insiste- en diciembre de 2000, cuando el Concejo Municipal de La Cumbre aprobó el Esquema de Ordenamiento Territorial de dicho municipio, pues fue a partir de ese momento en que se definió todo lo concerniente al ordenamiento territorial del municipio de La Cumbre y se estableció que el predio Hacienda La Cabaña hacía parte de un área de protección como bosque natural y reserva forestal”

Así las cosas, es menester resaltar que la acción de reparación directa instaurada por la señora Rocío del Carmen Gómez Marmol, caducó a partir del mes de agosto de 1977.

7. Análisis del proceso.

De acuerdo con las pretensiones, es claro que no están llamadas a prosperar en cuanto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues como ya se advirtió, la acción de reparación directa se encuentra caducada.

De la aplicación extensiva del numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones, no son conciliables los asuntos en los cuales haya caducado la acción.

El inmueble objeto de reclamación, fue afectado como área protegida en el año de 1964 conforme se anotó en el análisis de la caducidad de la acción, razón por la cual, las operaciones administrativas posteriores a los dos años siguientes, no son susceptibles de considerarse como fuentes de un daño apto de reparación. Circunstancia jurídica que permanece de forma ininterrumpida a la fecha, ratificado con las disposiciones proferidas en el año de 1997.

Es claro, que al momento en que se ejecuta la operación administrativa, el demandante no logra probar que la ostensión de la posesión del bien inmueble se encontraba amparada

por el instrumento legal de la adjudicación en la modalidad de predio baldío, que resultare oponible y por consiguiente susceptible de una contraprestación económica.

La Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, entre ellas, la sentencia T-580 del 18 de septiembre de 2017, resaltó los siguientes puntos sobre las características de los bienes baldíos:

- Son bienes fiscales adjudicables y, según la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.
- Se presumen como baldíos aquellos que no son o han sido poseídos por particulares, bajo el entendido de que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de dueño.
- **El simple hecho de ocupar tierras baldías no le da al correspondiente ciudadano la calidad de poseedor.**
- **La propiedad de tales bienes solo puede obtenerse mediante título traslativo de dominio otorgado por la ANT.**
- Los bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables

Así las cosas, es forzoso concluir que la parte demandante, dentro del proceso de acción de reparación directa NO logra allegar la prueba idónea que la acredite como legítimo poseedor del bien inmueble baldío, como sería la resolución de adjudicación proferida por la autoridad administrativa competente.

Lo que significa, que la parte accionante no tiene la vocación que le permita reclamar una indemnización por la pérdida de la posesión del inmueble.

Conforme lo resalta la Corte Constitucional, el simple hecho de ocupar tierras baldías, no se constituye en un legítimo poseedor

8. Declaraciones y pretensiones de la demanda.

- a. Se ordene la reparación integral a favor de la accionante, de todos los perjuicios causados.
- b. Como consecuencia de lo anterior, se restituya la posesión del bien inmueble en comento, o en su defecto se proceda a su pago en la suma de veinte millones (\$20.000.000), en la modalidad de año emergente, así como el pago de daños morales en una cuantía de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.

9. Síntesis de la contestación de la demanda.

En contra de las pretensiones, se interponen las excepciones de caducidad de la acción de reparación directa, inexistencia de la fecha generadora del daño, inexistencia del derecho de dominio por parte del demandante, carencia de responsabilidad del estado, así como la excepción de culpa o hecho exclusivo de la víctima.

10. Análisis del precedente judicial.

Las excepciones propuestas en contra de las pretensiones, se encuentran fundamentadas en los precedentes jurisprudenciales, destacándose el auto de fecha tres (3) de agosto dos mil seis (2006), proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente con el número de radicación 52001-23-31-000-2005-01660-01(32537), en el que se hace un análisis para la contabilización de los términos de caducidad de la acción de reparación directa:

(...)

Es posible que, en algunas ocasiones, la concreción o conocimiento del daño sólo se produzca con posterioridad al tiempo de acaecimiento de los hechos dañosos fundamento de la acción, circunstancias en las que se empezará a contar el término de caducidad a partir del momento en que alguna de aquéllas tenga ocurrencia, pues, de lo contrario, se estaría cercenando la posibilidad del acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) y, de otra parte, se colocaría a la persona que padece el detrimento en una situación de incertidumbre en relación con la posibilidad de solicitar la reparación del menoscabo padecido.

(...)

Otro de los precedentes jurisprudenciales de gran importancia en la defensa de Parques Nacionales Naturales de Colombia pertenece a la sentencia de veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), expedida por el Consejo de Estado, proceso 250002326000200401038 - 02 (41.370), mediante la cual, se resalta que los hechos materia de estudio frente a los daños que pueda generar una operación administrativa, pertenecen a los actos administrativos que crean el gravamen de los bienes inmuebles, y no la operación administrativa propiamente dicha, esto es, que si bien es cierto el estado tiene la facultad legal para crear gravámenes sobre bienes inmuebles y hacerlos efectivos por intermedio de una operación administrativa, también lo es, que el legítimo poseedor tiene derecho a una indemnización:

(...)

Para la Sala es claro que los daños que reclama la demandante devienen del Decreto 619 de julio de 2000 y del Decreto 903 de diciembre de 2001, mediante los cuales, en su orden, la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y reglamentó lo concerniente a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 114, Modelia, por cuanto fue en estos actos administrativos en el que dichos daños se materializaron, pues en ellos se resolvió todo lo relacionado al ordenamiento territorial de Bogotá y se definió la destinación del predio de la señora Alcira Medina Rugeles.

(...)

11. Conclusiones.

Teniendo en cuenta que la parte actora no logra probar el derecho legalmente reconocido como legítimo poseedor del bien inmueble al momento de ejecutarse la operación administrativa, Parques Nacionales Naturales de Colombia no cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho que le permitan presentar una fórmula de arreglo.

Es decir, que con el solo hecho de no lograrse probar la legítima posesión del inmueble por parte del accionante, resulta inoperante el estudio de la responsabilidad que pueda tener Parques Nacionales Naturales de Colombia, en cuanto a la operación administrativa.

En otros términos, se le sugiere al Comité de Conciliación y Defensa Judicial no conciliar en el presente caso.

FICHA DE CONCILIACION PREJUDICIAL
OWEN SANTIAGO IVOR JONES
HUGHES

1. Hechos generales.

De la lectura integral del escrito, se infiere que el convocante previo a la expedición de la resolución 191 del 31 de agosto de 1964 proferida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, que alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos, ostentaba la aprehensión material de una franja de terrero ubicada en el sector de Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta, la cual hace parte integral del citado parque.

Al parecer, se colige que el convocante como consecuencia de una operación administrativa, perdió la tenencia del citado inmueble.

2. Hechos - Complemento a los descritos en el registro relacionado.

Cabe destacar, que la parte convocante en su escrito de conciliación prejudicial, no logra precisar cuál fue la causa por la cual generó la pérdida de la tenencia del bien inmueble, como tampoco se precisa la fecha.

Esto es, no logra identificar el nexo jurídico que pueda existir entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y el hecho de perder la tenencia del inmueble por parte del convocante.

Se hace una descripción general de la naturaleza jurídica de los predios baldíos, la evolución normativa frente a su adjudicación, entre otros, así como la mención de las normas que rigen las áreas protegidas y su destinación, mencionando de manera aislada que el terreno objeto de indemnización no tenía la calidad de baldío.

3. Pruebas allegadas al caso por las partes.

El convocante, solicita que se tenga como prueba: “Hecho notorio respecto del despojo y destrucción de las viviendas yacentes en el predio del sector de Bonito Gordo, pues Se publicó en todos los diarios y redes sociales nacionales y especialmente de la ciudad de Santa Marta DTCH; por tanto no requiere probarse (art 167 del CGP)”, contrato de compraventa y una declaración extra juicio

4. Objeto de solicitud de conciliación.

Se le restituya el bien inmueble o en su defecto se le reconozca en calidad de indemnización los valores pertenecientes a los daños causado por la pérdida de la tenencia del referido inmueble. De no llegarse a un acuerdo conciliatorio, se declare agotado en legal forma el requisito de procedibilidad para instaurar la respectiva acción de reparación directa.

5. Principal problema jurídico

Se requiere de terminar, sí a consecuencia del proceso policivo de desalojo y desmonte de la construcción realizada por el accionante (Operación administrativa), generó un daño que comporte el reconocimiento de una indemnización a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

6. Análisis de caducidad y/o prescripción.

Teniendo en cuenta que la parte convocante hace una enunciación somera de un presunto despojo de la tenencia de una franja de terreno y la demolición de una construcción, se infiere que se trató de la recuperación del mismo por autoridad competente fundamentado legalmente en que dicha franja hace parte integral del Parque Nacional Natural Tayrona (Operación Administrativa).

Así las cosas, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de la jurisdicción de contencioso administrativo, es viable considerar que todas aquellas pretensiones en relacionadas con predios baldíos que se quieran hacer efectivas por la cuerda procesal de la acción de reparación directa, la caducidad se contabiliza a partir de los dos años siguientes a la ocurrencia y/o conocimiento de los hechos.

Para el caso que nos ocupa, es de señalar que mediante resolución 191 del 31 de agosto de 1964 expedida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, se alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos.

De igual manera, se cuenta con la resolución 21 del 23 de abril de 1975 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución ejecutiva 177 del 16 de junio de 1975, publicada en el diario oficial 34361 del 21 de julio de 1975, resoluciones que incorporan unos predios al área y el régimen legal Parque Nacional Natural Tairona.

En ese orden de ideas, a pesar que la parte convocante no precisa los hechos y la fecha, en gracia de discusión de aceptarse que ostentaba la posesión del inmueble previo a las resoluciones anteriormente mencionadas, el término de caducidad de dos años debe contarse a partir del 22 de julio de 1975.

Es decir, que el globo de terreno donde hace parte el predio objeto de reclamación, se graba como reserva forestal a partir del 21 de julio de 1975, fecha de publicación del acto administrativo de interés general anteriormente señalado.

Al respecto, el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (...)

En suma, si el actor consideraba que se le ocasionó un daño, debió instaurar la demanda dentro de los dos (2) años siguientes a la declaratoria de área protegida, que incluye el predio objeto de reclamación.

Guardando las proporciones, vale la pena traer a colación el fragmento de la jurisprudencia citada en la contestación de la demanda:

“No puede afirmarse, como lo sugiere la demandante, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contarse desde el 5 de abril de 2002 (cuando el alcalde del municipio de La Cumbre le informó que sus peticiones no fueron tenidas en cuenta en el Esquema de Ordenamiento Territorial y que, según la cartografía del mismo, su predio es un área de protección como bosque natural y área de protección), pues es claro que los daños antijurídicos por los cuales se demanda no se materializaron con dicha respuesta, sino que se concretaron –se insiste- en diciembre de 2000, cuando el Concejo Municipal de La Cumbre aprobó el Esquema de Ordenamiento Territorial de dicho municipio, pues fue a partir de ese momento en que se definió todo lo concerniente al ordenamiento territorial del municipio de La Cumbre y se estableció que el predio Hacienda La Cabaña hacía parte de un área de protección como bosque natural y reserva forestal”

Así las cosas, es menester resaltar que la acción de reparación directa que pretende instaurada el convocante, caducó a partir del mes de agosto de 1977.

7. Análisis del caso.

De acuerdo con las pretensiones, es claro que no están llamadas a prosperar en cuanto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues como ya se advirtió, la acción de reparación directa se encuentra caducada.

De la aplicación extensiva del numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones, no son conciliables los asuntos en los cuales haya caducado la acción.

El inmueble objeto de reclamación, fue afectado como área protegida en el año de 1964 conforme se anotó en el análisis de la caducidad de la acción, razón por la cual, las operaciones administrativas posteriores a los dos años siguientes, no son susceptibles de considerarse como fuentes de un daño apto de reparación. Circunstancia jurídica que permanece de forma ininterrumpida a la fecha, ratificado con las disposiciones proferidas en el año de 1997.

Es claro, que al momento en que se ejecuta la operación administrativa, el demandante no logra probar que la ostensión de la posesión del bien inmueble se encontraba amparada por el instrumento legal de la adjudicación en la modalidad de predio baldío, que resultare oponible y por consiguiente susceptible de una contraprestación económica. Obsérvese que en la solicitud de conciliación no se allega el instrumento idóneo que le permita acreditar la legalidad de la posesión del predio baldío.

La Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, entre ellas, la sentencia T-580 del 18 de septiembre de 2017, resaltó los siguientes puntos sobre las características de los bienes baldíos:

- Son bienes fiscales adjudicables y, según la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.
- Se presumen como baldíos aquellos que no son o han sido poseídos por particulares, bajo el entendido de que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de dueño.
- **El simple hecho de ocupar tierras baldías no le da al correspondiente ciudadano la calidad de poseedor.**
- **La propiedad de tales bienes solo puede obtenerse mediante título traslativo de dominio otorgado por la ANT.**
- Los bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables

Así las cosas, es forzoso concluir que la parte convocante, dentro de la solicitud de conciliación prejudicial NO logra allegar la prueba idónea que la acredite como legítimo poseedor del bien inmueble baldío, como sería la resolución de adjudicación proferida por la autoridad administrativa competente.

Lo que significa, que la parte convocante no tiene la vocación que le permita reclamar una indemnización por la pérdida de la posesión del inmueble.

Conforme lo resalta la Corte Constitucional, el simple hecho de ocupar tierras baldías, no se constituye en un legítimo poseedor

8. Análisis del precedente jurisprudencial

De instaurarse la acción de reparación directa en contra de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se tiene como mecanismo de defensa la excepción de la caducidad de la acción soportada en el precedente jurisprudencial, destacándose el auto de fecha tres (3) de agosto dos mil seis (2006), proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente con el número de radicación 52001-23-31-000-2005-01660-01(32537), en el que se hace un análisis para la contabilización de los términos de caducidad de la acción de reparación directa.

(...)

Es posible que, en algunas ocasiones, la concreción o conocimiento del daño sólo se produzca con posterioridad al tiempo de acaecimiento de los hechos dañosos fundamento de la acción, circunstancias en las que se empezará a contar el término de caducidad a partir del momento en que alguna de aquéllas tenga ocurrencia, pues, de lo contrario, se estaría cercenando la posibilidad del acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) y, de otra parte, se colocaría a la persona que padece el detrimento en una situación de incertidumbre en relación con la posibilidad de solicitar la reparación del menoscabo padecido.

(...)

Otro de los precedentes jurisprudenciales de gran importancia en la defensa de Parques Nacionales Naturales de Colombia pertenece a la sentencia de veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), expedida por el Consejo de Estado, proceso 250002326000200401038 - 02 (41.370), mediante la cual, se resalta que los hechos materia de estudio frente a los daños que pueda generar una operación administrativa, pertenecen a los actos administrativos que crean el gravamen de los bienes inmuebles, y no la operación administrativa propiamente dicha, esto es, que si bien es cierto el estado tiene la facultad legal para crear gravámenes sobre bienes inmuebles y hacerlos efectivos por intermedio de una operación administrativa, también lo es, que el legítimo poseedor tiene derecho a una indemnización:

(...)

Para la Sala es claro que los daños que reclama la demandante devienen del Decreto 619 de julio de 2000 y del Decreto 903 de diciembre de 2001, mediante los cuales, en su orden, la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y reglamentó lo concerniente a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 114, Modelia, por cuanto fue en estos actos administrativos en el que dichos daños se materializaron, pues en ellos se resolvió todo lo relacionado al ordenamiento territorial de Bogotá y se definió la destinación del predio de la señora Alcira Medina Rugeles.

(...)

Así mismo, se cuenta con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, los máximos tribunales de cierre, entre ellos el Consejo de Estado, coinciden en afirmar que es la carencia de un interés sustancial que permita al demandante ser vinculado al proceso y por consiguiente tenga el deber de reparar los presuntos daños generados por acción o por omisión.

El Consejo de Estado en su abundante jurisprudencia, entre ellas, la sentencia del 9 de agosto de 2012, proceso 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP), manifestó:

“EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA – Prospera al no demostrarse existencia de relación jurídica sustancial. De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. En tal orden, cabe destacar que al expediente no se allegó prueba de ningún vínculo existente entre la citada sociedad y el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, razón por la cual no es dable condenar a una sociedad sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acreditó la existencia de una relación jurídica-sustancial.”

Esto en el sentido que Parques Nacionales Naturales de Colombia no tiene la facultad legal directa para decretar y elevar a rango predios con el carácter de áreas protegidas.

9. Conclusiones.

Teniendo en cuenta que la parte convocante no logra probar el derecho legalmente reconocido como legítimo poseedor del bien inmueble al momento de ejecutarse la

operación administrativa, Parques Nacionales Naturales de Colombia no cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho que le permitan presentar una fórmula de arreglo.

FICHA DE CONCILIACION PREJUDICIAL
OWEN SANTIAGO IVOR JONES
HUGHES

1. Hechos generales.

De la lectura integral del escrito, se infiere que el convocante previo a la expedición de la resolución 191 del 31 de agosto de 1964 proferida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, que alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos, ostentaba la aprehensión material de una franja de terrero ubicada en el sector de Bonito Gordo de la ciudad de Santa Marta, la cual hace parte integral del citado parque.

Al parecer, se colige que el convocante como consecuencia de una operación administrativa, perdió la tenencia del citado inmueble.

2. Hechos - Complemento a los descritos en el registro relacionado.

Cabe destacar, que la parte convocante en su escrito de conciliación prejudicial, no logra precisar cuál fue la causa por la cual generó la pérdida de la tenencia del bien inmueble, como tampoco se precisa la fecha.

Esto es, no logra identificar el nexo jurídico que pueda existir entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y el hecho de perder la tenencia del inmueble por parte del convocante.

Se hace una descripción general de la naturaleza jurídica de los predios baldíos, la evolución normativa frente a su adjudicación, entre otros, así como la mención de las normas que rigen las áreas protegidas y su destinación, mencionando de manera aislada que el terreno objeto de indemnización no tenía la calidad de baldío.

3. Pruebas allegadas al caso por las partes.

El convocante, solicita que se tenga como prueba: “Hecho notorio respecto del despojo y destrucción de las viviendas yacentes en el predio del sector de Bonito Gordo, pues Se publicó en todos los diarios y redes sociales nacionales y especialmente de la ciudad de Santa Marta DTCH; por tanto no requiere probarse (art 167 del CGP)”, contrato de compraventa y una declaración extra juicio

4. Objeto de solicitud de conciliación.

Se le restituya el bien inmueble o en su defecto se le reconozca en calidad de indemnización los valores pertenecientes a los daños causado por la pérdida de la tenencia del referido inmueble. De no llegarse a un acuerdo conciliatorio, se declare agotado en legal forma el requisito de procedibilidad para instaurar la respectiva acción de reparación directa.

5. Principal problema jurídico

Se requiere de terminar, sí a consecuencia del proceso policivo de desalojo y desmonte de la construcción realizada por el accionante (Operación administrativa), generó un daño que comporte el reconocimiento de una indemnización a cargo de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

6. Análisis de caducidad y/o prescripción.

Teniendo en cuenta que la parte convocante hace una enunciación somera de un presunto despojo de la tenencia de una franja de terreno y la demolición de una construcción, se infiere que se trató de la recuperación del mismo por autoridad competente fundamentado legalmente en que dicha franja hace parte integral del Parque Nacional Natural Tayrona (Operación Administrativa).

Así las cosas, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de la jurisdicción de contencioso administrativo, es viable considerar que todas aquellas pretensiones en relacionadas con predios baldíos que se quieran hacer efectivas por la cuerda procesal de la acción de reparación directa, la caducidad se contabiliza a partir de los dos años siguientes a la ocurrencia y/o conocimiento de los hechos.

Para el caso que nos ocupa, es de señalar que mediante resolución 191 del 31 de agosto de 1964 expedida en su oportunidad por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución 225 del 29 de septiembre de 1964 del Gobierno Nacional, se alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de interés nacional y en beneficio de todos los colombianos.

De igual manera, se cuenta con la resolución 21 del 23 de abril de 1975 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, aprobada por la resolución ejecutiva 177 del 16 de junio de 1975, publicada en el diario oficial 34361 del 21 de julio de 1975, resoluciones que incorporan unos predios al área y el régimen legal Parque Nacional Natural Tairona.

En ese orden de ideas, a pesar que la parte convocante no precisa los hechos y la fecha, en gracia de discusión de aceptarse que ostentaba la posesión del inmueble previo a las resoluciones anteriormente mencionadas, el término de caducidad de dos años debe contarse a partir del 22 de julio de 1975.

Es decir, que el globo de terreno donde hace parte el predio objeto de reclamación, se graba como reserva forestal a partir del 21 de julio de 1975, fecha de publicación del acto administrativo de interés general anteriormente señalado.

Al respecto, el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (...)

En suma, si el actor consideraba que se le ocasionó un daño, debió instaurar la demanda dentro de los dos (2) años siguientes a la declaratoria de área protegida, que incluye el predio objeto de reclamación.

Guardando las proporciones, vale la pena traer a colación el fragmento de la jurisprudencia citada en la contestación de la demanda:

“No puede afirmarse, como lo sugiere la demandante, que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contarse desde el 5 de abril de 2002 (cuando el alcalde del municipio de La Cumbre le informó que sus peticiones no fueron tenidas en cuenta en el Esquema de Ordenamiento Territorial y que, según la cartografía del mismo, su predio es un área de protección como bosque natural y área de protección), pues es claro que los daños antijurídicos por los cuales se demanda no se materializaron con dicha respuesta, sino que se concretaron –se insiste- en diciembre de 2000, cuando el Concejo Municipal de La Cumbre aprobó el Esquema de Ordenamiento Territorial de dicho municipio, pues fue a partir de ese momento en que se definió todo lo concerniente al ordenamiento territorial del municipio de La Cumbre y se estableció que el predio Hacienda La Cabaña hacía parte de un área de protección como bosque natural y reserva forestal”

Así las cosas, es menester resaltar que la acción de reparación directa que pretende instaurada el convocante, caducó a partir del mes de agosto de 1977.

7. Análisis del caso.

De acuerdo con las pretensiones, es claro que no están llamadas a prosperar en cuanto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues como ya se advirtió, la acción de reparación directa se encuentra caducada.

De la aplicación extensiva del numeral 1 del artículo 90 de la Ley 2220 de 2022 por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones, no son conciliables los asuntos en los cuales haya caducado la acción.

El inmueble objeto de reclamación, fue afectado como área protegida en el año de 1964 conforme se anotó en el análisis de la caducidad de la acción, razón por la cual, las operaciones administrativas posteriores a los dos años siguientes, no son susceptibles de considerarse como fuentes de un daño apto de reparación. Circunstancia jurídica que permanece de forma ininterrumpida a la fecha, ratificado con las disposiciones proferidas en el año de 1997.

Es claro, que al momento en que se ejecuta la operación administrativa, el demandante no logra probar que la ostensión de la posesión del bien inmueble se encontraba amparada por el instrumento legal de la adjudicación en la modalidad de predio baldío, que resultare oponible y por consiguiente susceptible de una contraprestación económica. Obsérvese que en la solicitud de conciliación no se allega el instrumento idóneo que le permita acreditar la legalidad de la posesión del predio baldío.

La Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, entre ellas, la sentencia T-580 del 18 de septiembre de 2017, resaltó los siguientes puntos sobre las características de los bienes baldíos:

- Son bienes fiscales adjudicables y, según la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.
- Se presumen como baldíos aquellos que no son o han sido poseídos por particulares, bajo el entendido de que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de dueño.
- **El simple hecho de ocupar tierras baldías no le da al correspondiente ciudadano la calidad de poseedor.**
- **La propiedad de tales bienes solo puede obtenerse mediante título traslativo de dominio otorgado por la ANT.**
- Los bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables

Así las cosas, es forzoso concluir que la parte convocante, dentro de la solicitud de conciliación prejudicial NO logra allegar la prueba idónea que la acredite como legítimo poseedor del bien inmueble baldío, como sería la resolución de adjudicación proferida por la autoridad administrativa competente.

Lo que significa, que la parte convocante no tiene la vocación que le permita reclamar una indemnización por la pérdida de la posesión del inmueble.

Conforme lo resalta la Corte Constitucional, el simple hecho de ocupar tierras baldías, no se constituye en un legítimo poseedor

8. Análisis del precedente jurisprudencial

De instaurarse la acción de reparación directa en contra de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se tiene como mecanismo de defensa la excepción de la caducidad de la acción soportada en el precedente jurisprudencial, destacándose el auto de fecha tres (3) de agosto dos mil seis (2006), proferido por el Consejo de Estado dentro del expediente con el número de radicación 52001-23-31-000-2005-01660-01(32537), en el que se hace un análisis para la contabilización de los términos de caducidad de la acción de reparación directa.

(...)

Es posible que, en algunas ocasiones, la concreción o conocimiento del daño sólo se produzca con posterioridad al tiempo de acaecimiento de los hechos dañosos fundamento de la acción, circunstancias en las que se empezará a contar el término de caducidad a partir del momento en que alguna de aquéllas tenga ocurrencia, pues, de lo contrario, se estaría cercenando la posibilidad del acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) y, de otra parte, se colocaría a la persona que padece el detrimento en una situación de incertidumbre en relación con la posibilidad de solicitar la reparación del menoscabo padecido.

(...)

Otro de los precedentes jurisprudenciales de gran importancia en la defensa de Parques Nacionales Naturales de Colombia pertenece a la sentencia de veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017), expedida por el Consejo de Estado, proceso 250002326000200401038 - 02 (41.370), mediante la cual, se resalta que los hechos materia de estudio frente a los daños que pueda generar una operación administrativa, pertenecen a los actos administrativos que crean el gravamen de los bienes inmuebles, y no la operación administrativa propiamente dicha, esto es, que si bien es cierto el estado tiene la facultad legal para crear gravámenes sobre bienes inmuebles y hacerlos efectivos por intermedio de una operación administrativa, también lo es, que el legítimo poseedor tiene derecho a una indemnización:

(...)

Para la Sala es claro que los daños que reclama la demandante devienen del Decreto 619 de julio de 2000 y del Decreto 903 de diciembre de 2001, mediante los cuales, en su orden, la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y reglamentó lo concerniente a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 114, Modelia, por cuanto fue en estos actos administrativos en el que dichos daños se materializaron, pues en ellos se resolvió todo lo relacionado al ordenamiento territorial de Bogotá y se definió la destinación del predio de la señora Alcira Medina Rugeles.

(...)

Así mismo, se cuenta con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, los máximos tribunales de cierre, entre ellos el Consejo de Estado, coinciden en afirmar que es la carencia de un interés sustancial que permita al demandante ser vinculado al proceso y por consiguiente tenga el deber de reparar los presuntos daños generados por acción o por omisión.

El Consejo de Estado en su abundante jurisprudencia, entre ellas, la sentencia del 9 de agosto de 2012, proceso 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP), manifestó:

“EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA – Prospera al no demostrarse existencia de relación jurídica sustancial. De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. En tal orden, cabe destacar que al expediente no se allegó prueba de ningún vínculo existente entre la citada sociedad y el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, razón por la cual no es dable condenar a una sociedad sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acreditó la existencia de una relación jurídica-sustancial.”

Esto en el sentido que Parques Nacionales Naturales de Colombia no tiene la facultad legal directa para decretar y elevar a rango predios con el carácter de áreas protegidas.

9. Conclusiones.

Teniendo en cuenta que la parte convocante no logra probar el derecho legalmente reconocido como legítimo poseedor del bien inmueble al momento de ejecutarse la

operación administrativa, Parques Nacionales Naturales de Colombia no cuenta con los fundamentos de hecho y de derecho que le permitan presentar una fórmula de arreglo.



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

CERTIFICA:

Que el Comité de Conciliaciones y Repetición de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en sesión llevada a cabo el 06 de marzo de 2023, se reunió con el fin de analizar la ficha Conciliación Judicial dentro del proceso adelantado ante el Juzgado Noveno Administrativo Del Circuito Judicial de Santa Marta, radicado 2022-00024-00, siendo demandante Saida Milena García Manjarrez y Otros, y en contra de Parques Nacionales Naturales y otros.

El Comité una vez analizado los hechos de la solicitud, por unanimidad decidió NO CONCILIAR, acogiendo las recomendaciones expuestas por el apoderado, especialmente por considerar que no existe un nexo causal directo entre el deceso y las funciones de la Entidad, que permitan la consideración de una presunta falla en el servicio; por lo que se concluye que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA no debe proponer ni aceptar fórmula alguna en la aludida audiencia de Conciliación.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá, D.C. el 06 de marzo de 2023.

ANDREA PINZÓN TORRES

Secretaria Técnica Comité de Conciliación



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

OFICINA ASESORA JURIDICA

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 08 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3431

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

CERTIFICA:

Que el Comité de Conciliaciones y Repetición de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en sesión llevada a cabo el 06 de marzo de 2023, se reunió con el fin de analizar la ficha Conciliación prejudicial siendo convocante OWEN SANTIAGO IVOR JONES, ante Procuraduría 155 Judicial II para asuntos Administrativos de Santa Marta, radicado E-2022-735815 y en contra de Parques Nacionales Naturales.

El Comité una vez analizado los hechos de la solicitud, por unanimidad decidió NO CONCILIAR, acogiendo las recomendaciones expuestas por el apoderado, principalmente porque de acuerdo con la solicitud de conciliación, no existen elementos de hecho ni de derecho que demuestren el nexo de la responsabilidad con el actuar de Parques Nacionales Naturales.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el apoderado, se concluye que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA no debe proponer ni aceptar fórmula alguna en la aludida audiencia de Conciliación.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bogotá, D.C. el 06 de marzo de 2023.

ANDREA PINZÓN TORRES

Secretaria Técnica Comité de Conciliación



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

OFICINA ASESORA JURIDICA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 08 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3431
www.parquesnacionales.gov.co